CIENCIA. TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD: LOS DEBERES PENDIENTES

Mario Rapoport[*]

La ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino sólo aquellos que el sistema le estimula a crear. Para el bienestar individual de algunos o muchos, heladera y corazones artificiales, y para asegurar el orden, o sea la permanencia del sistema, propaganda, la readaptación del individuo alienado o del grupo disconforme. No se ha ocupado tanto, en cambio, de crear instrumentos para eliminar esos problemas de fondo del sistema: métodos de educación, de participación, de distribución....

Oscar Varsavsky

1. Dependencia tecnológica: una marca registrada

Una de las características centrales de las economías periféricas reside en su elevado grado de vulnerabilidad externa, que las torna considerablemente endebles frente a los cambios en las condiciones internacionales. Entre los motivos principales en los cuales se apoya esa debilidad, se encuentra la incapacidad de sus sistemas económicos para desarrollar endogenamente las innovaciones que guían la evolución de los procesos productivos, siendo justamente esa dependencia tecnológica la que impide que estos países generen y controlen internamente las fuentes de su crecimiento económico.

En ese sentido, la mayor desintegración que en esas naciones presenta el aparato productivo redunda en la creciente necesidad de importación, bien para acceder a ciertos bienes de consumo, bien para completar los casilleros vacíos en la estructura industrial (como se evidencia hoy en el caso argentino, que durante 2004 aumentó sus importaciones de capital en un 114%), lo cual, a su vez, contribuye a reforzar esa dependencia, en la medida que la organización fabril pasa a responder a los parámetros dictados por una tecnología que da respuesta principalmente a los requisitos planteados por las condiciones socioeconómicas que se hallan en su lugar de origen, los países centrales. Asimismo, en tanto no se alcance la frontera tecnológica, se configura un perfil de comercio exterior donde las exportaciones se ven dominadas por productos que explotan las ventajas derivadas de los recursos naturales o de la baratura de la mano de obra. En todos los casos, se da lugar a la existencia de un mercado de trabajo precario al tiempo que el sector externo, dado el carácter indispensable de las importaciones y la inestabilidad de los precios de las mercancías enviadas al extranjero, tiende a caer en reiteradas crisis que concluyen en la devaluación de la moneda y una redistribución regresiva de los ingresos.

En nuestro país, interrumpida el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que pese a no lograr eliminar estos y otros obstáculos había significado un avance en esa dirección, aquella dependencia se vio acentuada a partir de la implementación de las políticas neoliberales. La brusca e indiscriminada reducción arancelaria se conjugó con el progresivo retraso del tipo de cambio abriendo paso a un camino que condujo, simultáneamente, a la desindustrialización y extranjerización de la economía. Por un lado, muchas actividades desaparecieron y varias de las empresas que

[*] Director del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI). Investigador Superior del Conicet.

se desempeñaban en ellas se transformaron en comercializadoras. Por el otro, las compañías foráneas que en numerosos casos arribaron por medio de la compra de activos en los sectores más rentables (de forma tal que no aportaron, necesariamente, a la ampliación de la capacidad instalada) reemplazaron proveedores locales por aprovisionamiento de sus casas matrices o de otras filiales de la misma firma, siendo las PyMES las más perjudicadas, sin poder observarse el prometido despegue exportador.

Al mismo tiempo, se produjo una ininterrumpida y creciente fuga de cerebros, que es el correlato del escenario económico arriba descripto y se traduce, vaya paradoja, en una nueva transferencia de fondos de la periferia hacia el centro: en un seminario internacional se calculaba que la preparación de un médico argentino costaba al país 50 mil dólares mientras que en los Estados Unidos la suma era 5 veces mayor. Debido a esta circunstancia, y al nivel de excelencia de nuestros especialistas, los países centrales se llevan a científicos argentinos ya formados ahorrándose mucho dinero.

Una de las cuestiones que no debe soslayarse es la retroalimentación existente entre los condicionamientos al desarrollo que imponen la dependencia tecnológica y la financiera, cuyo caso más paradigmático fue la iniciativa impulsada por el Banco Mundial, en 1995, y que consistía en la eliminación del Conicet y otros organismos similares, coincidente con la recomendación para que los científicos locales se dedicasen a "lavar los platos" que por esa época un "superministro" de economía hizo pública. Esta propuesta se contradice con las propias prácticas de los países centrales. En ese sentido, no resulta llamativo hallar que, entre 1790 y 1836, los Estados Unidos, como importadores netos de tecnología, restringieron la emisión de patentes a sus propios ciudadanos y residentes y en el caso de los derechos de autor tal protección se mantuvo hasta 1891. Incluso, algunas restricciones permanecieron hasta la entrada de ese país en la Convención de Berna, en 1989. Hoy en día, y más allá de la enorme diferencia en términos de cantidad, en los Estados Unidos el 52% de las patentes registradas son adjudicadas a residentes, mientras que en la Argentina no llega al 10%.

Sin embargo, la vinculación subordinada a los centros del poder económico mundial demanda actores locales que viabilicen y legitimen esa relación. Como ejemplo de ello, basta recordar la forma en la cual nuestro país se desenvolvió en la etapa del modelo agroexportador a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, renunciando a la imposición de aranceles a las manufacturas británicas que permitiesen el desarrollo de al menos algunas industrias locales, tal el caso de los textiles y la maquinaria agrícola, consecuencia del peso político de los sectores terratenientes. La conformación histórica de nuestra elite junto con la inexistencia de proyectos de largo plazo son algunos de los factores que contribuyen a explicar la baja participación que el sector privado nacional tiene en la inversión en Investigación y Desarrollo. Este sector aporta tan sólo el 30% del total invertido en ese rubro cuando en Estados Unidos se eleva al 67%, en Canadá es el 48% y en Brasil el 40%.

El corolario de lo hasta aquí descripto es la relevancia que adquiere la intervención del actor estatal. Contrariamente a los postulados del Consenso de Washington, tan fervientemente asimilados por gran parte de la intelectualidad argentina y latinoamericana, la experiencia del sudeste asiático demuestra la necesidad de que el sector público, lejos de abandonar todo a los dictámenes del mercado, determine prioridades que atiendan a un desarrollo económico y social autosustentable, para lo cual la orientación y disciplinamiento del sector privado así como un sostenido financiamiento de las actividades de investigación resultan claves. En particular, a través de innovaciones tecnológicas que respondan a la formación de nuestros recursos humanos y a las necesidades propias del país. Pero este paso exige previamente la ruptura de la dependencia cultural, de forma tal de romper las cadenas que aún

esclavizan nuestra imaginación y concebir alternativas propias a los problemas que nos toca enfrentar.

En última instancia, la dependencia tecnológica remite a la subordinación del pensamiento, en el marco del complejo sistema de relaciones que se entablan bajo un modo determinado de producción. Como Albert Einstein afirmaba en una visita a la Argentina, allá por 1940, los pueblos que no logren generar y proteger conocimientos, "descubrir jóvenes talentosos y asegurar que permanezcan en su tierra... conservarán litorales hermosos, iglesias, canteras y yacimientos, una historia fantástica, pero probablemente no tengan las mismas banderas ni las mismas fronteras, ni mucho menos éxito económico".

2. A ciencia cierta, ¿adonde vamos?

En noviembre de 2004 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires un encuentro que por su importancia merece ser destacado. Se trata de la "Reunión Ciencia, Tecnología y Sociedad", que congregó a más de 300 científicos del continente americano para dar a conocer los últimos avances que se han alcanzado en la producción científica y tecnológica. Este cónclave coincidió a su vez con el inicio del evento "Buenos Aires Piensa", organizado conjuntamente por el Gobierno de la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires. Más allá de estas iniciativas, que tienen por objeto llamar la atención de la comunidad en su conjunto y demostrar la necesidad de sostener socialmente el desarrollo de estas áreas, cabe preguntarse en qué medida las mismas constituyen una prioridad en nuestro país.

En ese sentido, una primera muestra de su escasa relevancia es la escueta participación que los gastos en investigación y desarrollo tienen en relación al producto bruto interno. Mientras para la Argentina ese coeficiente fue de 0,41% en el 2003, para Canadá, por mencionar una nación con la cual son frecuentes las comparaciones, fue de 1,87%, al tiempo que para Alemania, por caso, rondaba el 2,5% (debiendo recordarse las abultadas diferencias en cuanto a los niveles de producto). Asimismo, es aún más ilustrativo contrastar el valor de dicho coeficiente con el 1,04% que en el año 2000 presentaba Brasil, y que supone un factor que incide e incidirá sobre las crecientes asimetrías entre los dos principales socios del Mercosur. Esta reducida inversión se manifiesta paralelamente en nuestra estructura de comercio exterior, en tanto la exportación de bienes con poco valor agregado y limitado grado de sofisticación tiene como contrapartida la importación de bienes de capital y de la tecnología no incorporada en aquellos bienes y que consiste básicamente en la transmisión de conocimientos técnicos. Ahora bien, la referencia al perfil comercial nos remite a las características del aparato productivo y a las políticas económicas que lo delinearon, siendo que son aquéllas las que determinan el papel que ocupa la innovación en el entramado productivo.

Por ejemplo, la Argentina de principios del siglo XX, que en el marco de una elevada concentración de la propiedad rural basaba su dinamismo en las exportaciones de materias primas, ejercía un sesgo contrario a la producción local de tecnología por medio de la ausencia de todo proyecto industrializador, que redundaba en bajos aranceles a la importación de bienes manufacturados, a punto tal que ni siquiera el sector de maquinaria agrícola fue desarrollado. Esta desaprensión permite explicar la inexistencia de eslabonamiento productivo alguno en lo que hace a las actividades más dinámicas que se encontraban en manos extranjeras, como ser los frigoríficos y los ferrocarriles. Desinterés que se plasmó en extremo en el Tratado Roca-Runciman, por el cual el Estado nacional se comprometía, entre otras cosas, a otorgar preferencia a las

empresas británicas en los contratos para aprovisionamiento de las empresas públicas, como YPF, lo que suponía relegar a un segundo plano tanto la posibilidad de abastecimiento local como las demandas técnicas (era Estados Unidos el que en ese entonces poseía la tecnología de punta). Es decir, resignaba su rol de promotor del desarrollo fabril para resguardar la cuota de las carnes argentinas en el mercado inglés.

Ya con el modelo de sustitución de importaciones, el impulso dado a la actividad industrial y la necesidad de incrementar la producción agrícola, que era la que generaba los saldos exportables indispensables para solventar las importaciones de insumos y bienes de capital, conformaron una base objetiva que estimulaba la articulación de la investigación científica con el aparato productivo y dieron lugar al surgimiento de la CNEA, el INTA, el INTI y el Conicet. Paralelamente, desde mediados de los años '50 y hasta el golpe militar de 1966, la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, vivió su etapa más brillante, durante la que se creó además un valioso instrumento de difusión, Eudeba. Sin embargo, estos avances convivían con tendencias contrarias al progreso tecnológico local. Por un lado, el alto grado de protección que requerían los nuevos emprendimientos para no ser arrasados por los bienes provenientes desde el exterior, al no estar acompañado por mecanismos estatales que condujesen a un mayor nivel de competencia, desincentivaba los procesos de innovación. Por otro, la apuesta a los capitales extranjeros no incluyó ningún tipo de exigencia en relación a la participación de proveedores locales ni control sobre el pago de regalías, provocando una escasa repercusión sobre la eficiencia del resto de la economía y manteniendo fuera del país el centro de producción tecnológica, que permanecía allí donde se localizaban las casas matrices. Así y todo, hacia principios de la década del '70 se observaba cierta maduración, expresada en el aumento de las exportaciones industriales y en la evolución de algunas industrias controladas por el capital local, como la farmacéutica.

Pero este camino se bloqueó a partir de 1976, cuando el modelo económico implementado de allí en más afectó de diversos modos a la actividad científica y tecnológica. En primer lugar, la salvaje represión que exigía su aplicación derivó en la pérdida de numerosos investigadores, que continuaron la fuga de cerebros iniciada con la recordada Noche de los Bastones Largos del año '66, mantenida hoy bajo la forma del exilio económico. Para captar cabalmente la dimensión de esta sangría, se calcula que cerca de 7.000 científicos argentinos residen en estos días en el exterior, cantidad que supera con amplitud a los que trabajan en la Argentina en el marco de la carrera del investigador científico del Conicet. Peor aún, según Fernando Lema, del Instituto Pasteur de París, la Argentina invirtió en las últimas décadas 40 mil millones de dólares en preparar a los científicos que emigraron. Los países desarrollados y, en especial Estados Unidos, drenan una parte sustancial de nuestros recursos humanos lo que representa un financiamiento gratuito que no figura entre los pagos de nuestra deuda externa.

En segundo lugar, la brusca reducción arancelaria, de la mano de un tipo de cambio permanentemente atrasado y de la liberalización financiera, condujeron a la reprimarización del aparato productivo y a la supremacía de la lógica especulativa, factores que relegaron a un segundo plano las estrategias de innovación por parte del sector privado. Con el predominio de las políticas neoliberales en los '90, siguiendo al pie de la letra las reformas estructurales propuestas por los organismos internacionales de crédito, se llegó incluso a poner en cuestión el rol mismo de las instituciones científicas en la sociedad. Como señalaba Alberto Baldi, el presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, en el encuentro que mencionamos al principio, "decir que no tenemos que tener ciencia propia" es como aceptar también "no tener un arte propio, una pintura, una literatura, un pensamiento filosófico propio".

Por desgracia, esta idea está profundamente anclada en nuestro empresariado. En una reunión para la formulación del primer Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de Mediano y Largo Plazo, el representante de uno de los grupos industriales nacionales más importantes del país expresó que "el sector productivo tiene pocos requerimientos (de ciencia), ya sea porque las multinacionales tienen su centro de investigaciones en Detroit o porque en muchos casos en la Argentina se pueden hacer excelentes negocios sin necesidad de invertir en ciencia y tecnología". Aquí -continuaba- "se privatizaron todos los servicios públicos y de esas exigencias (instalar laboratorios de investigación) no hubo nada".

A fin de apoyar a las ciencias, en Brasil, por ejemplo, las empresas privadas pagan un impuesto para investigación y desarrollo en materia de petróleo, gas y otras actividades productivas. Nada que ver con lo que pasó hace pocos años en la Argentina, donde en lugar de proponer medidas parecidas un ministro de economía mandó, sin vergüenza alguna, a los científicos a "lavar los platos", por considerar sus actividades de escasa importancia.

Es un hecho que la educación y los recursos destinados a la ciencia y a la tecnología separan actualmente y separarán aún más en el futuro, al mundo desarrollado del que no lo es. Pero una política de estímulo a la actividad científica y tecnológica, como la que se busca impulsar a través de actividades como la mencionada en este artículo, está íntimamente asociada a los lineamientos generales que marcan el rumbo económico y social de cada país y a la estructura productiva en la que ha de insertarse. De la dirección que nuestros gobiernos adopten en este sentido dependerá nuestro propio destino como nación.

3. La política científica en la universidad

Un conocido diccionario define al investigador como aquel "que se dedica a la investigación científica o policial y al que hace las veces de detective oficial o privado". Planteada así, la tarea del investigador debería atraer a todo espíritu aventurero o deseoso de descubrir las incógnitas que plantea la vida, la sociedad o el crimen. Sentirse un poco Marlowe, el célebre detective de Raymond Chandler, no es, en verdad, algo extraño para los sufridos personajes que se dedican a la investigación científica en la Argentina. No sólo por los padecimientos propios de una labor estimulante pero peligrosa (los caminos del conocimiento se asemejan a veces a los laberintos de Borges) sino por las mismas condiciones de vida y de trabajo: un duro como Marlowe sobrevivía por el amor a su chica; un científico trabaja por amor a la ciencia.

Pero el amor tiene sus límites; porque la ciencia no se desarrolla únicamente en base a sentimientos. Necesita un sólido apoyo material y moral y ámbitos apropiados de trabajo para poder interrogar a la naturaleza y a la sociedad y responder con alguna certidumbre a los problemas existenciales que nos preocupan o nos angustian. Con ello, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente, a descubrir senderos firmes de crecimiento económico y social o, simplemente, a explorar lo desconocido.

Que la educación y los recursos destinados a la ciencia y a la tecnología separan actualmente, y separarán aún más en el futuro, a las naciones desarrolladas de las que no lo son, es un lugar común que todos en apariencia aceptan. Pero lo que no se comprende de la misma manera es el rol central que la universidad juega en la elaboración y concreción de una política de investigación para el país.

La Universidad de Buenos Aires, como otras universidades nacionales, ha intentado tratar de diferenciarse de ser un simple "enseñadero" o una fábrica de títulos, donde el conocimiento no se cuestiona ni se perfecciona. A pesar de las restricciones

presupuestarias globales, la UBA incrementó en los últimos años su presupuesto para Ciencia y Tecnología; desarrolló programas de becas de investigación para estudiantes y graduados; financió y apoyó proyectos de investigación; proveyó equipamiento científico a distintos grupos e institutos; promovió vínculos internacionales y actividades de difusión científica y técnica. Pero lo realizado, que parece mucho, es aún insuficiente.

Las comparaciones internacionales son en este sentido, aunque tomándolas con cautela por las evidentes diferencias de desarrollo entre los países, bastante reveladoras. Por supuesto, no es necesario referirse a las universidades más prestigiosas del mundo como Harvard, Yale o Berkeley en EEUU; Oxford o Cambridge en Inglaterra u otras en Europa. Una institución no tan conocida, como la Universidad Laval, de Québec, Canadá, que cuenta con 36.000 estudiantes (poco más de un 12% que el de la UBA), destinaba anualmente en la década del '90 más de u$s 100 millones a la investigación (fondos internos y externos) y los presupuestos de los institutos que se dedican a ella en las Facultades dedicadas a las Ciencias Sociales alcanzan cifras de varios cientos de miles de dólares.

La situación de la UBA, con 8 veces más alumnos (y mucho menor apoyo estatal en proporción que algunas de aquellas universidades del primer mundo, incluso privadas) es, por supuesto, muy diferente. No sólo la relación presupuesto de ciencia-técnica/ estudiante resulta abrumadoramente inferior, sino que los institutos de nuestra universidad carecen de presupuesto propio; el rol del investigador aún no está bien definido (por el estatuto de la UBA todo profesor debería al mismo tiempo investigar, como ocurre en las universidades que hemos mencionado, pero de hecho esto no acontece); la infraestructura y remuneraciones se hallan muy alejadas de las que existen en aquellos países.

El problema se agrava si entendemos a la investigación como parte consustancial de las mismas carreras universitarias. Además de la existencia de institutos o grupos de investigadores en cada Facultad, las actividades de investigación deberían estar incorporadas a la enseñanza, formar parte directa de la *currícula* de las carreras de grado y posgrado. Como señala el profesor mexicano Oscar Soria, debería promoverse "una reorientación" de los cursos universitarios, susceptible de verificarse en: actitud del profesor hacia la materia, modalidad de presentación de la misma, manejo de fuentes de información, relación de la materia con la realidad y las culturas circundantes. En resumen, se requería -para él- la utilización de lo existente (currículo, aula, métodos, textos, tecnología) para nutrirlo y reorientarlo hacia el desarrollo de la capacidad investigativa del estudiante. La carencia de profesores-investigadores hace, por el momento, que este objetivo esté en la Argentina más cerca de la utopía que de la realidad.

En esta perspectiva, los investigadores de las Facultades vinculadas a las Ciencias Económicas y Sociales deben jugar un rol clave en el fortalecimiento y desarrollo de la política de investigación de la UBA. Esas Facultades, por la estrecha relación del objeto de conocimiento que constituye la base de sus *curriculas* con los problemas mas acuciantes que afectan a la sociedad, está en condiciones de brindar, a través de sus institutos e investigadores, un aporte sustancial para el mejor conocimiento y superación de los mismos.

El universo a investigar en dichas ciencias puede ser tan fascinante como el de Marlowe, a través de él es posible descubrir las conductas extraviadas que han paralizado el desarrollo económico y social argentino y ayudar a poner "patas para arriba", de una vez por todas, a los índices "criminales", cuantitativos y cualitativos, que denuncian esa realidad.

4. Un universo cuestionado: los sistemas universitarios en Argentina y Brasil

La crisis de 2001 demostró la inviabilidad del modelo de país instaurado por la última dictadura y profundizado en la década del '90, abriendo las puertas a un debate respecto a qué clase de nación y de desarrollo quiere la Argentina. Entre las cuestiones más importantes en discusión se halla la del tipo de educación superior necesario. Algunos de los temas principales son los constantes fracasos de los aspirantes a entrar en las universidades, ya sea por los exámenes de ingreso o por el abandono de los estudios en las primeras etapas; la poca relación entre las carreras más numerosas y aquellas disciplinas que podrían considerarse prioritarias económica, cultural y socialmente; las falencias de los mecanismos de gobierno de las universidades públicas que en muchos casos necesitan ser reformados; la débil incidencia de la investigación y de los profesores con dedicación exclusiva en el conjunto de las actividades universitarias; la dilatada sustanciación y escasa transparencia de los concursos o la no realización de los mismos; la pérdida de autonomización de la universidad pública a través de un control gubernamental implementado por las reformas neoliberales de los '90; la desfavorable comparación mediática entre la educación pública y la privada en desmedro de la primera y la mayor creación y proliferación de universidades privadas en las últimas décadas; el conocido problema presupuestario de las universidades públicas, etc. Un universo muy amplio que vamos a acotar a través de un análisis comparado con nuestro vecino Brasil, teniendo en cuenta los crecientes esfuerzos de integración regional, y abordando dos ítems muy específicos: por un lado, el carácter más o menos abierto del acceso universitario; por otro, las políticas estatales que relacionan la educación superior con el aparato productivo y la investigación básica. Para ello, una breve introducción histórica nos permitirá comprender mejor ambas problemáticas.

Al analizar esta cuestión en Argentina y Brasil, la primera diferencia que salta a la vista, desde un punto de vista histórico, radica en el momento de su creación. Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, las universidades argentinas fueron creadas según el modelo español, específicamente el de Salamanca. De origen temprano, la Universidad Nacional de Córdoba abrió sus puertas en el año 1613, mientras que la Universidad de Buenos Aires hizo lo propio en 1821. Por el contrario, Brasil dio a luz a su primera universidad en forma tardía, en el año 1920. En el caso argentino, como en el de la mayor parte del continente, las luchas de la independencia tuvieron un fuerte impacto sobre el sistema universitario que, a partir de entonces y bajo la influencia de la ilustración francesa, adoptó el modelo de la universidad napoleónica, con su culto al profesionalismo y su énfasis anti-teológico, al tiempo que se introducían ciertas tendencias positivistas. Con todo, a diferencia de lo que acontecía en Europa, estas instituciones de educación superior continuaron siendo de carácter patricio, teniendo acceso a las mismas únicamente los hijos de las clases más acomodadas.

La reforma universitaria que se impuso en Córdoba, en 1918, significó un fuerte cimbronazo a todo el sistema universitario latinoamericano: si las reformas posteriores a la época de las luchas por la independencia habían logrado alejar a las universidades de la iglesia supeditándolas al Estado, la reforma del '18 buscó, y logró, la autonomía respecto del mismo Estado. Sin embargo, a pesar del carácter más democrático de las universidades públicas –lo que no quiere decir representativo de sus integrantes porque sus gobiernos están, en muchos casos, cada vez más cooptados por corporaciones profesionales o partidos políticos-, el sistema universitario continuó siendo por largo tiempo para un grupo reducido de gente, aunque avanzando el siglo comenzó a

experimentar un crecimiento del número de instituciones, docentes y alumnos, a lo que se sumó, desde 1958, la existencia de universidades privadas. De todos modos, tanto el sistema de educación superior en la Argentina, al igual de lo que ocurre en Brasil, se caracteriza todavía por un alto grado de elitismo: la diferencia es que en el país vecino este hecho es reconocido y aquí no.

Por ejemplo, si analizamos la composición del estudiantado podemos observar que en ambos casos existe una fuerte correlación entre el nivel socioeconómico y el grado de escolaridad. En el caso argentino, según datos del censo del año 2000, casi un 70% del estudiantado universitario total pertenece a familias que se ubican en el 40% más pudiente de la sociedad, mientras que los hijos de las familias comprendidas en el 40% más pobre no llegan a representar al 15%. En Brasil la situación es aún más alarmante, pues allí el 40% más rico se corresponde con el 80% de la matrícula universitaria total. Además, en este caso, existen asimetrías relacionadas con el origen étnico del estudiantado: mientras que la población blanca es cercana al 50%, en las universidades llegan a constituir más del 80% del total del alumnado.

¿Cómo podemos dar cuenta de este fenómeno? El acceso a la educación superior, pública y privada, en Brasil está sujeto a los cupos vacantes. Al terminar los estudios medios, los jóvenes brasileños que desean realizar estudios superiores deben rendir un examen, llamado *vestibular*, cuyos resultados son decisivos a la hora de ingresar al sistema. En el 2002 se presentaron 3 candidatos por vacante ofrecida y sólo poco más del 20% lograron aprobar sus exámenes, quedando aproximadamente un 30% de plazas vacías y siendo más difícil la entrada a las universidades públicas que a las privadas. El caso argentino es diferente por cuanto en algunas instituciones públicas prima un ingreso presuntamente irrestricto, es decir, sin cupos ni examen pero con un Ciclo Básico Común de un año, como en la Universidad de Buenos Aires, mientras que en otras el examen de ingreso existe, como en Brasil, y constituye una barrera de entrada.

No obstante, el problema principal aquí son las falencias que provienen de la educación secundaria, hecho corroborado en la misma UBA donde la deserción en el CBC es muy alta. El mecanismo de exclusión resulta así previo al inicio de las actividades universitarias: o los sectores más desfavorecidos no pueden entrar en él o lo abandonan pronto. Un hecho crucial para explicar este fenómeno es el deterioro de la enseñanza media pública por las reformas de los años '90. Algo que las clases más pudientes y preparadas pueden sortear a través de colegios públicos de calidad subsistentes o de la enseñanza privada secundaria, aunque prefieran todavía, por su carácter gratuito y su prestigio, la educación superior pública. El resultado de esto es que aún bajo un sistema universitario sin cupos, los sectores más pobres de la sociedad argentina no tienen acceso a la educación superior. En consecuencia, no puede pensarse en cambiarla sin llevar adelante, paralelamente, fuertes reformas en los niveles iniciales y medios.

Otra problemática que merece ser analizada es que el sistema universitario argentino nació divorciado del aparato productivo y del desarrollo científico, y en forma altamente improvisada. Como señalaba Ortega y Gasset, en un artículo escrito luego de un viaje a la Argentina, en 1929, "el desarrollo, extensión y riqueza de la Argentina obliga a que se instituya en poco tiempo un buen golpe de universidades con un número muy crecido de cátedras", mientras que en Europa "sólo cuando había un grupo crecido de gentes que venían largamente cultivando una disciplina, se creaba el puesto público para su enseñanza". Aquí, según Ortega, se invertía el orden. "...y las cátedras, los puestos, los huecos sociales surgen antes que los hombres capaces de llenarlos". De esa forma, se hizo "desde luego normal que las sirviese cualquiera, aún con la más

insuficiente preparación". Por otra parte, durante la etapa agroexportadora, existió una escasa relación entre las investigaciones realizadas y la producción nacional. Es así que, si bien resulta innegable, a pesar de las observaciones del filósofo español, la excelencia alcanzada por algunas instituciones locales durante la primera mitad del siglo XX -y también después-, el campo, que era la principal fuente de riqueza, nunca entabló vínculos estrechos con la educación superior. Predominaron en ella las profesiones liberales vinculadas a los servicios y no a la producción ni a la investigación científica básica.

Pero, tampoco el posterior proceso de industrialización se nutrió de desarrollos tecnológicos generados por las universidades. Con él se abrieron las puertas para un cambio, aunque nunca se lograron niveles de integración entre ciencia, tecnología y aparato productivo similares a los existentes en el "primer mundo", como en los Estados Unidos, donde las universidades realizaron grandes aportes al sector productivo o a la ciencia básica. Peor aún, la última dictadura militar puso un freno al proceso industrializador, reprimarizando la economía y priorizando las actividades financieras. Como consecuencia de ello, y frente a políticas estatales que promovían la importación de tecnología, la universidad vio como se reducían sus recursos sin contar con la presencia de sectores económicos que, en otros tiempos, requerían de sus egresados. Diferente es el caso de Brasil, donde se mantuvo en el tiempo un importante sector industrial y productivo que necesita siempre de cuadros bien formados.

En conclusión, dado que Argentina se encuentra actualmente en un proceso de redefinición de su modelo de desarrollo, es necesario repensar las razones del carácter excluyente de la universidad, así como su grado de relación con el aparato productivo y la importancia de tener una formación científica y humanística coherente con esas aspiraciones. El ejemplo brasileño resulta interesante en términos comparativos, aunque se corresponde con un país más industrializado y conciente de sus necesidades pero que reproduce el alto grado de inequidad de las estructuras sociales existentes, un elemento a tener en cuenta a la hora de profundizar el proceso de integración regional. En cualquier caso, resulta crucial reflexionar sobre esta temática, para sustentar un tipo de universidad acorde con la nueva etapa de crecimiento del país y con una mejor distribución del conocimiento y de las competencias intelectuales y profesionales del conjunto de sus habitantes.

5. El espíritu de la reforma

Algunos de los nudos centrales de la problemática que define la elección de Rector en la Universidad de Buenos Aires, en los primeros meses de 2006, deben ser analizados desde la propia perspectiva de la historia argentina y de la naturaleza de movimiento de la Reforma Universitaria, que nació en Córdoba en 1918 y contribuyó a eliminar los criterios elitistas y anacrónicos que imperaban en los claustros universitarios hasta aquel entonces.

La reforma, movimiento que se extendió pronto a toda América Latina, tuvo varios objetivos. Entre ellos, instauró el gobierno democrático en las universidades argentinas, con la participación activa de los estudiantes y estableció normas aún vigentes, como la designación de profesores por concurso. Estas medidas facilitaron el acceso a la enseñanza de nuevos sectores sociales. Pero es interesante señalar, para determinar su espíritu, algunos de los principios establecidos en el proyecto inicial de Ley Universitaria presentado por los reformistas, que no eran los mismos que los que rigen ahora sino más amplios. Por ejemplo, respecto al claustro de profesores decía que tenían

derecho electoral no sólo los concursados sino también los llamados "libres", que podríamos asimilar a los ahora "interinos". Ambos, los libres y los concursados, podían nombrar un número igual de delegados para participar en el colegio electoral que designaba a los decanos e integrar, luego, la Asamblea universitaria que debía elegir al Rector.

En el claustro de graduados la propuesta original también era distinta: para poder votar debían estar inscriptos en el padrón al menos un año antes y pagar una cuota regular que los vinculaba a las respectivas facultades. Tenían, además, que organizar y dirigir los seminarios de investigaciones en sus respectivos ámbitos de estudio. En los dos casos, la representación se vinculaba estrechamente al grado de participación en la actividad universitaria.

Por otra parte, como lo señaló el presidente de la FUA, Osvaldo Loudet en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, en 1918: "no es de este siglo la universidad cerrada, burocrática, inmóvil" sino aquella "abierta, libre, científica, humana". La universidad no puede limitarse tampoco "a su «función profesional», es decir, a capacitar los individuos para el desempeño de las diversas profesiones liberales... debe tener una «función científica», esto es, preparar hombres de ciencia". Este criterio en muchos momentos de la historia argentina se perdió. En 1928 Florentino Sanguinetti señalaba que "la universidad es exclusivamente profesional...no hace cultura". La reforma no era -para él- "ni un estatuto, ni un régimen electoral", encerraba "una nueva manera docente, una función social y un concepto peculiar de la cultura".

Esto es el fundamento de lo que está en juego en la UBA: los problemas de representatividad y una partidización política vinculada a intereses extrauniversitarios (que afectan indirectamente la propia autonomía), por un lado, y la disociación entre la profesionalización, la docencia, la investigación y los contenidos humanísticos y culturales, por otro.

Ambas cuestiones deben resolverse, y el consenso sobre ello en la comunidad universitaria es tan importante como la elección del Rector.

6. La crisis de la universidad: un problema estructural

La crisis en la Universidad de Buenos Aires, tiene rasgos estructurales que trascienden la coyuntura; aunque la polémica en torno de la postulación del candidato a Rector, que finalmente renunció a presentarse, haya tenido connotaciones propias y significativas

El gigantismo es el primero de esos rasgos. Las 13 facultades que la componen constituyen prácticamente universidades en si mismas. Sin embargo, el presupuesto conjunto por estudiante es bajo e insuficiente y debería incrementarse en forma sensible. Un atenuante es que a los fondos de universidad se agregan los recursos propios -cursos de posgrado, asistencia técnica, consultorías- que determinan, en la medida que una parte sustancial de los mismos queda dentro de las Facultades, que algunas de éstas tengan mayores ingresos, generalmente las más profesionales, por sobre las otras. Esto atrae la atención de sectores o corporaciones específicas, que vinculan esos fondos a requerimientos del mercado y no a proyectos académicos. De ese modo, se profundiza la división entre las Facultades según las disciplinas prevalecientes: las que tienen una mayor vinculación al ámbito estrictamente profesional o aquellas en las que predominan estudios científicos, sociales o humanísticos. Esta tensión puede producir con el tiempo una fractura de consecuencias profundas en el contenido de los estudios universitarios. Problema en parte planteado en la Universidad de París, que terminó dividiéndola en varias unidades independientes.

Entre los aspectos de mayor controversia sea halla el que se refiere el plantel de profesores. En algunas Facultades, las más numerosas y profesionales, los que revistan como ad-honorem superan a los rentados y la cantidad de docentes interinos (nombrados directamente) es mayor que la de concursados. Si bien la existencia de concursos públicos debería garantizar la independencia e idoneidad académica tal cosa no siempre sucede: o no son llamados con la frecuencia necesaria o pueden a durar varios años o sufrir anulaciones intempestivas, lo que indica que el mismo Estatuto actual no se respeta debidamente. Esto explica por qué la proporción de profesores concursados constituye en esas Facultades un escaso porcentaje del plantel docente de las mismas.

Estas cuestiones nos llevan al problema de la representatividad de los claustros que eligen a las autoridades. Resulta claro que en las Facultades con escasa proporción de profesores concursados, que son los que votan, el claustro de profesores no representa cabalmente al conjunto de los docentes. Una solución provisoria podría permitir el voto de los interinos más antiguos y establecer mientras tanto una carrera docente, cumpliendo estrictamente un cronograma de concursos en función de ella y luego un seguimiento al estilo de lo que se hace en el Conicet, donde los investigadores deben presentar informes periódicos de sus actividades.

Idéntico problema de representatividad tiene el claustro de graduados. Por lo general, en las disciplinas más profesionales tienen una gran influencia en él asociaciones, consejos, colegios o corporaciones específicas, cuyo interés es más político o económico que académico. En este sentido, existe una confusión entre el graduado como "clase", en tanto egresado de la universidad, del graduado que por sus tareas o nivel de vinculación con su ámbito académico respectivo continúa perteneciendo al mismo después de terminados sus estudios, tal como lo interpretaban los reformistas del '18. Los estudiantes del cada vez más amplio ámbito de posgrado, podrían pertenecer a este claustro aunque no fueran graduados de la misma Facultad.

En cuanto al claustro estudiantil, una cuestión a tener en cuenta es que la elección no es proporcional a los votos, subestimando o tornando imposible la representación de las minorías. La participación de los no docentes es otro tema a considerar, por su intereses y presencia permanente en la institución.

Por último, temas no menores son el escaso vínculo existente entre representantes y representados, para lo cual no existen los mecanismos adecuados; la garantía de un estricto respecto de las normas vigentes (aún más si se hace imprescindible un cambio del Estatuto); y la necesidad de un mayor compromiso del conjunto de la comunidad universitaria con sus propios problemas y con los requerimientos de la sociedad. Este son los verdaderos nudos gordianos de la crisis que atraviesa la universidad pública más grande del país.